

C.A. de Concepción

Concepción, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes, don Pedro Ignacio Peña Sánchez, abogado, en representación del demandante en procedimiento ordinario laboral, en autos caratulados “**CARRASCO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ**”, causa RIT **O-1639-2023**, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de junio de 2024, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, la que fue notificada con la misma fecha, para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso, invalide la mencionada sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, así acogiendo íntegramente la demanda con costas.

Como antecedentes, señala que su parte interpuso, con fecha 14 de noviembre de 2023, demanda por despido indirecto justificado, Nulidad del Despido, y Cobro de Prestaciones Laborales adeudadas en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. En el libelo pretensor se indica que su representado comenzó a prestar servicios, a partir del 02 de agosto de 2017, a favor de la ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz, hasta el día que ejerció su despido indirecto con fecha 30 de agosto de 2023, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo.

El demandante se desempeñó en cargos evidentemente estables, permanentes e indispensables en la organización jerárquica de la demandada. Sus funciones jamás fueron no habituales de esta organización, tampoco se trató de cometidos específicos y mucho menos los servicios se pueden catalogar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQTQXRLPCPW

como transitorios y temporales.

A su vez, tampoco se acreditaron los pagos previsionales de todo el periodo de relación laboral, existiendo cotizaciones impagas al efecto, por lo que se solicitó al tribunal de instancia que declarara la nulidad del despido, estimar al despido indirecto como uno de carácter justificado y que condenara a la demandada al pago de las prestaciones que en la demanda se indicaron.

La demandada en su contestación solicitó el rechazo en todas sus partes, con costas, bajo el principal argumento de señalar que el vínculo que unió a las partes fue de carácter civil bajo una contratación a honorarios y negó, en consecuencia, que fuera de índole laboral.

El tribunal de instancia por sentencia definitiva de 28 de junio de 2024 acogió la demanda de reconocimiento de relación laboral, declaró el despido indirecto como justificado.

Invoca como causales de anulación, la del artículo 477 del Código del Trabajo como principal en relación al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 17 y 19 del DL 3500, y a los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, solicitando se anule parcialmente la sentencia dictada, y acto seguido dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto justificado, el pago de las prestaciones adeudadas que fueron concedidas, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que ahora condene al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el periodo demandado, y a la sanción de nulidad del despido a la demandada. Como causal subsidiaria, interpone la del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley, sólo en relación ley



al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 17 y 19 del Decreto Ley 3500, que se anule parcialmente la sentencia dictada, y acto seguido dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto justificado, el pago de las prestaciones adeudadas que fueran concedidas, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que ahora condene al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el periodo demandado.

Por su parte, la parte demandada invoca como causal la del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es el haberse dictado el fallo con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo; En subsidio, la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto: *“Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”*;

El fundamento de la causal es que se aplicó e interpretó en forma errónea el artículo 171 en relación con el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, al establecer que el no pago de cotizaciones y la no escrituración del contrato de trabajo como incumplimientos de tal gravedad que permitan poner término anticipado a la relación habida entre las partes, indicando en el ***“Considerando DÉCIMO, Que, en cuanto al despido indirecto, cobrando aplicación lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, debe señalarse que la actora invoca como causal la prevista en el artículo 160 N°7 del Código Laboral, esto es, incumplimiento grave de obligaciones que impone el contrato de trabajo al empleador. Los incumplimientos son tres: 1.- El no pago de las cotizaciones de Seguridad Social. 2.- La no escrituración del Contrato de Trabajo. 3.- No otorgamiento del feriado legal***



durante el periodo trabajado. La falta de escrituración del contrato, establecida como obligación del empleador en el artículo 9 del Código del Trabajo. Respecto de las cotizaciones, los certificados allegados al juicio por medio de oficios informan que la demandada tampoco pagó las cotizaciones de seguridad social en el período trabajado. Por lo anterior, es posible advertir la efectividad de los incumplimientos alegados por la actora, situación grave desde que la falta de escrituración del contrato supone una cierta incerteza respecto del régimen jurídico que protege a la demandante y la falta de pago de prestaciones de cotizaciones ocuyen o al menos dificultan su acceso a las prestaciones de seguridad social frente a eventos como la enfermedad o la vejez, por lo que estos hechos configuran la causal de incumplimiento grave de obligaciones de parte de empleador. Lo anterior constituye suficiente fundamento para acoger la demanda de despido indirecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 171 inciso 1° del Código del Trabajo, que dispone que “Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 ó 7 del artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal del número 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en un ochenta por ciento”. Por lo que se hará lugar a la pretensión de la actora en cuanto al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por años de servicio, siendo esta última aumentada en un 50%,



conforme con el tenor de la norma transcrita.”

Señala la recurrente que la circunstancia que se declare por intermedio de la sentencia recurrida que la relación que unió a las partes goza de todas las características para ser calificada como una de índole laboral, no resta importancia al hecho de haber actuado el municipio bajo el amparo de una norma legal que, formalmente, le permitía la contratación de personal a honorarios y la dictación de actos administrativos al efecto, los cuales gozan de una presunción de legalidad que únicamente se ve derribada a través de esta sentencia; agregando que tal presunción de legalidad, que rigió durante la vigencia de los contratos que unieron a las partes, impide que el incumplimiento de la demandada pueda ser calificado como grave - en tanto, si bien la sentencia que da cuenta de la existencia de una relación laboral tiene el carácter de declarativa, no es sino a partir de su dictación, y no antes, que los gastos por concepto de las prestaciones asociadas adquieren certeza y pueden ser válidamente realizados, considerando el principio de legalidad del gasto que rige a la Administración. En relación con el incumplimiento lo cierto es que la vinculación de la actora con la Municipalidad de San Pedro de la Paz, únicamente pudo ocurrir debido a los diversos contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre la demandante y la administración, los cuales si bien es cierto no revistieron la forma de un contrato de trabajo y en ese sentido se verifica el incumplimiento, erra la sentencia al darle el carácter de incumplimiento grave y en consecuencia aplicar erróneamente la norma del artículo 171 en relación con el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo y declarar que la relación laboral que unió a las partes terminó por Despido Indirecto en razón de incumplimientos graves imputables al empleador; el



incumplimiento mencionado no reviste el carácter de grave por cuanto, no obstante, no tener el título de “contrato de trabajo” el documento que formalizó la relación existente entre las partes cumplió a cabalidad con lo exigido en el artículo 10 del Código del Trabajo, por lo que al indicar el fallo recurrido en su Considerando Décimo, ya reproducido, que “la falta de escrituración del contrato supone una cierta incerteza respecto del régimen jurídico que protege a la demandante” incurre en un error ya que no es posible afirmar dicha incertidumbre cuando el documento que formalizó su prestación de servicios para la Municipalidad de San Pedro de la Paz, cumplía con lo exigido por la Ley para ser considerado un Contrato de Trabajo , por tanto, si bien el incumplimiento existió este no es grave por cuanto no generó ninguna afectación en los derechos de la trabajadora. Respecto del incumplimiento relativo al “No pago de cotizaciones previsionales”, si bien es efectiva su ocurrencia desde que la Municipalidad de San Pedro de la Paz no efectuó pago de prestaciones previsionales de la actora, este tampoco reviste el carácter de gravedad suficiente a efectos de justificar la aplicación del artículo 171 y en consecuencia habilitar a la actora a poner término a su contrato de trabajo por despido indirecto, por cuanto, atendida la naturaleza civil del contrato que vinculaba a las partes -el cual únicamente adquirió naturaleza laboral con la dictación de la sentencia recurrida- mi representada carecía de título para hacer pago de las cotizaciones de seguridad social y de salud demandadas por la demandante durante la vigencia de la contratación a honorarios, resultándole imposible el pago de dicha prestación; por lo que en consecuencia, al indicar el fallo recurrido en su Considerando Décimo, ya reproducido, que “la falta de pago de prestaciones de cotizaciones ocluyen o al menos dificultan su acceso a las prestaciones de seguridad social



frente a eventos como la enfermedad o la vejez,” incurre en un error ya que en los hechos asentados en la sentencia, y acreditados mediante los correspondientes medios de prueba quedó establecido en el considerando Décimo Tercero, parte final, lo siguiente: *“Sin embargo, de los oficios acompañados se verifica que la demandante no mantiene deuda con la Isapre Colmena desde su afiliación el 29/05/2020. Respecto de AFP Uno S.A., no aparecen pagados las cotizaciones del período que indica, echa por tierra el razonamiento del Juzgador A Quo, ya que la actora nunca vio dificultado su acceso a las prestaciones de salud o seguridad previsional para la vejez.*

En subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es: “*Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior*” En este caso, el juez se hace cargo de los hechos puesto a su conocimiento, interpretando los medios de prueba ofrecidos e incorporados en las audiencias respectivas, señalando que entre las partes existió una relación laboral y así fue declarado en lo resolutivo de la sentencia, en su considerando Noveno; y una vez establecida la relación laboral el tribunal A Quo se abocó a la procedencia de la causal de término de la relación contractual habida entre las partes, esto es, el cumplimiento o no de las formalidades del despido indirecto y el fondo del mismo, es decir, si los incumplimientos invocados por la actora revestían la gravedad suficiente como para concluir el contrato por la causal invocada, en el considerando decimo, errando el juez en la calificación jurídica que les otorga a los hechos al otorgarle a los incumplimientos esgrimidos el nivel de gravedad suficiente para dar lugar al autodespido. Sobre este punto, no resulta menor



destacar que las municipalidades se encuentran habilitadas para contratar a personal bajo régimen del Código del Trabajo, toda vez que existe texto legal expreso que así lo permite, como es el artículo 3° de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto para los Funcionarios Municipales, conforme al cual: *“Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación. El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá también por las normas del Código del Trabajo. Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos se regirán por la ley N° 15.076, en lo que respecta a remuneraciones y demás beneficios económicos, horario de trabajo e incompatibilidades. En las demás materias, que procedan, les serán aplicables las normas de este estatuto”*. De lo anterior se desprende con absoluta claridad, que no les está vedado a los Municipios contratar a personal bajo régimen del Código del Trabajo. Sin embargo, tal como puede apreciarse, se trata de una norma que regula casos específicos, mientras que el resto de la contratación municipal se rige, en términos generales, por las normas del mencionado estatuto, que prescribe que la contratación de funcionarios puede ser de planta, a contrata o a honorarios. En otras palabras, tratándose el contrato a honorarios de uno celebrado por un órgano de la Administración del Estado - entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575 - concurre un elemento que entrega un matiz al momento de analizar el incumplimiento que funda el autodespido, cual es que la contratación fue pactada al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, otorgaba una presunción de



legalidad. La causal de autodespido que se ha esgrimido en la especie es aquella contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En consecuencia, para determinar la procedencia de la causal de término de la relación laboral, resulta imprescindible decidir si la conducta de su representada de no cumplir con obligaciones de origen estrictamente laboral - como es la retención y pago de cotizaciones previsionales y la escrituración de contrato de trabajo- configura el presupuesto tenido a la vista por el legislador como causal subjetiva de término del vínculo, en la especie, el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Éste incumplimiento debe ser de tal naturaleza y entidad que produzca un quiebre en la relación laboral e impida la convivencia normal entre uno y otro contratante, o bien, se trate de conductas que lesionen y/o amenacen en cierto modo la seguridad y estabilidad de alguna de las partes del contrato. En otras palabras, no basta cualquier incumplimiento para gatillar la causal de despido.

En este caso, la circunstancia que se declare por intermedio de esta decisión que la relación que unió a las partes goza de todas las características para ser calificada como una de índole laboral, no resta importancia al hecho de haber actuado el municipio bajo el amparo de una norma legal que, formalmente, le permitía la contratación de personal a honorarios y la dictación de actos administrativos al efecto, los cuales gozan de una presunción de legalidad que únicamente se ve derribada a través de esta sentencia. En este orden de ideas, tal presunción de legalidad, que rigió durante la vigencia de los contratos que unieron a las partes, impide que el incumplimiento de la demandada pueda ser calificada como grave - en tanto, si bien la



sentencia que da cuenta de la existencia de una relación laboral tiene el carácter de declarativa, no es sino a partir de su dictación, y no antes, que los gastos por concepto de las prestaciones asociadas adquieren certeza y, considerando el principio de legalidad del gasto que rige a la Administración, pueden ser válidamente realizados. En otras palabras, antes de la dictación de la presente sentencia, en cuanto ésta declara la existencia de una relación laboral, no podía estimarse que, al no cumplir obligaciones reguladas en el Código del Trabajo, el municipio estuviese incurriendo en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, en tanto su actuación se hallaba amparada por una presunción de legalidad de índole administrativo y, en todo caso, se veía impedida por expresa disposición legal de realizar los desembolsos correspondientes a un vínculo de esta naturaleza”;

Siendo evidente el yerro de la sentencia, solicita se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo con las peticiones concretas que indica: Se anula parcialmente el fallo por haber incurrido en la causal del artículo 477 por Infracción de Ley del Código del Trabajo, y acto seguido dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando que la relación laboral existente entre las partes finalizó por renuncia voluntaria de la actora y en consecuencia no procede pago alguno de las prestaciones demandadas por concepto de Despido Indirecto justificado. Y, en subsidio, se anula parcialmente el fallo por haber incurrido en la causal del artículo 478 letra c) es decir, errónea calificación jurídica de los hechos, y acto seguido dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando que la relación laboral que existió entre las partes finalizó por renuncia voluntaria de la actora y en consecuencia no procede pago alguno



de las prestaciones demandadas por concepto de Despido Indirecto justificado.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE LA DEMANDANTE:

1.- Que, para resolver la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley, en lo que concierne a la obligación de los órganos de la Administración del Estado de enterar las cotizaciones de una persona con la que existió una vinculación a honorarios calificada de laboral por la sentencia impugnada, es necesario reiterar que en materia previsional, la premisa está dada por el reconocimiento de la orden contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo que impone al empleador el deber de deducir de las remuneraciones de los trabajadores “las cotizaciones de seguridad social”, tratándose de un descuento de carácter perentorio que la afecta, cuya naturaleza imponible es determinada por ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500. Además, para afirmar la vigencia de tal obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no se reconociera como laboral por las partes, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3, inciso segundo, de la Ley N°17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral. El artículo 58, al establecer la obligación alude a las “cotizaciones de seguridad social”, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 números 9 y 18 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la



configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de financiar los sistemas que las administran, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes. Luego, se ha agregado que lo anterior resulta aplicable también a las cotizaciones que sustentan el seguro de cesantía previsto en la Ley N°19.728, pues corresponde igualmente a uno establecido en forma obligatoria en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del ramo, de modo que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5 de la misma ley y, en caso de incumplimiento, el artículo 11 de la ley prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del Decreto Ley N°3.500, haciéndole aplicable numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. De manera que, por los fines que satisface este seguro, el carácter obligatorio y universal con que se ha impuesto, y por la técnica de pago y cobro de los montos que contribuyen a financiarlo, no cabe sino concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

2.- En el caso del pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que, por su intermedio, se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 18. En efecto, tratándose de



la primera posibilidad, se ha sostenido la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones previsionales y salud cuando el trabajador las ha enterado voluntariamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado por esa vía, pues tal conducta del dependiente evita la existencia de “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y lo habilita para acceder a los beneficios respectivos, de manera que no hay un daño que reparar, lo que torna improcedente la orden de pagar tales prestaciones, y sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no han sido previamente enteradas, en la parte que se adeuden. En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el convenio a honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo. En este caso en particular, en que el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven, serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño que pueda imputarse al demandado, motivo por el cual se comparten los fundamentos del juez de primer grado en este punto, no advirtiéndose infracciones de las



normas invocadas como sustento de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por lo que el recurso de la demandante será rechazado.

EN CUANTO AL RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA:

3.- Que, la demandada esgrime la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, al haberse dictado el fallo con infracción de ley, específicamente respecto al artículo 162 inciso 5° y 7° del mismo cuerpo normativo, porque la sanción aplicada de nulidad del despido se encuentra considerada para el caso de que el empleador no se encuentre al día en el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador al momento de su despido, siendo la figura del despido indirecto un acto jurídico diverso, encontrándose este regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo, el que no establece la sanción aludida como uno de esos efectos,

Agrega que el despido indirecto es un acto jurídico diverso en el cual es el trabajador quien voluntariamente pone término al contrato de trabajo, y se encuentra considerado en una norma diversa, que regula todos sus efectos y requisitos, en el artículo 171 del Código del Trabajo, norma que no considera la nulidad del despido como uno de sus efectos o sanciones. La redacción del inciso 5 del artículo 162 específicamente contiene acciones obligatorias que solo el empleador debe realizar para no incurrir en la sanción, tales como la de informar por escrito al trabajador el estado de pago de sus cotizaciones previsionales y adjuntar los comprobantes respectivos. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, que dispone “*Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu*”, el sentido de la norma es claro, pues expresamente ha dispuesto que la nulidad del despido opera



precisamente cuando ocurre un “*despido*”, es decir, el acto unilateral propio del empleador que pone término al contrato de trabajo suscrito con el trabajador, y no cuando opera un acto jurídico diverso, como es el despido indirecto, en el cual una parte distinta del contrato, pone término al mismo.

Solicita que se acoja la causal de nulidad contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, y se declare la incompatibilidad de la acción de nulidad del despido con la acción de despido indirecto, por ser esta improcedente.

4.- Que, la causal del artículo 477, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados. Por lo tanto, cuando se impugna una sentencia a través de esta causal la restricción inevitable para el recurrente es la de respetar los hechos que se ha tenido por probados en la sentencia, porque su único objeto – como se ha dicho– es revisar el juzgamiento jurídico del caso.

5.- Que, desde este punto de vista, efectivamente se adeudan las cotizaciones previsionales y de salud del actor, por lo que esta Corte, comparte lo que señala la sentencia ya que existe una equivalencia al despido disciplinario del artículo 160 del mismo Código, y en ese sentido su objeto es equiparar la situación desmejorada que tiene el trabajador en la relación laboral, dotándolo de las mismas herramientas y facultades con que cuenta el empleador para sancionar los incumplimientos graves de sus trabajadores y, en ese contexto, los efectos del ejercicio de la facultad que el artículo 171 del Código del Trabajo, otorga al trabajador deben ser los mismos que se derivan cuando



el despido es provocado por el empleador, pues en ambos casos la justificación para poner término a la relación laboral es la ruptura del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

6.- Que, en efecto, la sanción que contempla el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo tiene lugar ya sea que el despido lo realice el empleador, como también cuando es el trabajador quien se auto despide, porque ha sido su contraparte quien ha incumplido gravemente las obligaciones que impone el contrato de trabajo, toda vez que en ambos casos, nos encontramos ante la misma situación fáctica que sustenta la norma para tutelar los derechos del trabajador, esto es, que se adeuden cotizaciones previsionales al término del contrato de trabajo, careciendo de relevancia quien ha comunicado el despido, puesto que el objeto que se busca por esta medida en ambos casos, es el mismo: compeler a que el empleador cumpla con el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones, por la vía de invocarse este instituto contemplado en la legislación laboral, dado que otras medidas han resultado ineficaces.

7.- Que, sustentar lo contrario, permitiría dejar de aplicar la norma contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, ante una situación fáctica que amerita la misma tutela, toda vez que bastaría con que el empleador incurriera en causales de despido, incluidas las que corresponden al no pago de cotizaciones previsionales -como es el caso de autos-, para mantener un estado de ilicitud, puesto que el trabajador se encontraría impedido de recurrir a dicho instituto para proteger los derechos que la norma protege, estimulando además la inobservancia de las normas laborales y, en especial, la del artículo 171 del mismo cuerpo legal.



8.- Que, en consecuencia, compartiéndose la interpretación que realizó la sentencia al artículo 162 inciso 5° y 7° del Código del Trabajo, que la expresión "*despido*" debe interpretarse de manera amplia, para tutelar los derechos que la ley laboral reconoce al trabajador, en concordancia con el principio que la doctrina ha denominado *indubio pro operario*, atendido los hechos asentados en la sentencia, por lo que no se visualiza que ella haya incurrido en infracción de ley, al interpretar esta norma que se esgrime vulnerada por el recurrente, por lo que se rechazará también este motivo de invalidación, y el recurso de nulidad de la parte demandada

Invocó también en forma subsidiaria la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, se alega que el incumplimiento alegado por la trabajadora no tiene la entidad suficiente para ser calificado como grave, siendo a su juicio, un reclamo desmedido, dado que a partir de problemas administrativos de la empresa, durante cierto periodo de tiempo, resultó muy difícil atender al pago de las cotizaciones previsionales de la actora, por lo que su cumplimiento se vio temporalmente interrumpido durante cierta cantidad de meses, teniendo conocimiento que se trataba de un desajuste extraordinario, que sería resuelto a la brevedad, y que su representada habría intentado remediar, enfatizando en que de este incumplimiento, el cual describe como transitorio, no se habrían derivado consecuencias adversas para la actora de una gravedad suficiente como para sustentar su despido indirecto. En consecuencia, el juez, al calificar la conducta como grave, ha incurrido en el vicio que fundamenta la causal, por lo cual la misma permite anular la sentencia, debiendo calificar dicha conducta como no grave, y en su mérito, rechazar la demanda de



despido indirecto por ser el mismo injustificado, y declarar que el contrato de trabajo ha concluido por renuncia voluntaria de la trabajadora.

Solicita acoger el recurso por la causal de nulidad contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, y declarar que el despido indirecto ejecutado por la demandante es injustificado, estableciendo el término de la relación laboral por renuncia voluntaria de la trabajadora.

9.- Que en lo establecido por la sentencia sobre la naturaleza de la relación laboral entre las partes, calificada como laboral, se comparten los fundamentos del juez del grado, por lo que la calificación jurídica de los hechos es la correcta, lo que conduce al rechazo del recurso. En efecto, siendo la calificación de la gravedad que impugna el recurrente, una cuestión de valoración, que el tribunal *a quo* fundó en los hechos establecidos, luego de apreciar los antecedentes y la entidad del incumplimiento contractual en que incurrió el empleador -realizando un juicio de proporcionalidad-, la circunstancia que la parte que recurre no lo comparta, no determina necesariamente que haya existido una errónea calificación jurídica, que haga necesaria la alteración de ella, por lo que se rechazará esta primera causal de nulidad.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos los artículos 478 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por la parte demandada y demandante contra la sentencia de estos antecedentes.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Redacción de la Ministro Matilde Esquerré Pavón.

ROL 492-2024.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQTQXRLPCPW

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Matilde Esquerre P., Ministra Suplente Claudia Andrea Vilches T. y Fiscal Judicial Aylin Carol Schroeder C. Concepcion, veintiseis de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a veintiseis de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQTQXRLPCPW